

Riesgo político en África: tendencias regionales y escenarios

Political risk in Africa: regional trends and scenarios

Eduardo Carreño Lara*
María José Henríquez Uzal**

RESUMEN

El artículo examina el riesgo político en África, enfatizando su marcada heterogeneidad y refutando la idea de un "riesgo africano" monolítico. Este riesgo se configura sobre cimientos de legados coloniales inconclusos y fallas persistentes de gobernanza, los cuales se expresan a través de una compleja interacción de factores internos y externos. La exclusión generalizada de la juventud, el impacto de la "maldición de los recursos", los efectos del cambio climático y la creciente injerencia de actores foráneos, convergen como catalizadores fundamentales de la inestabilidad que caracteriza a diversas regiones del continente.

El estudio revela que, si bien la región ha experimentado un deterioro general en su estabilidad, existen contrastes marcados, con algunas zonas mostrando resiliencia institucional frente a otras inmersas en conflictos. Se examinan diversas crisis de seguridad, incluyendo el aumento del terrorismo en varias áreas, los golpes militares que a menudo son percibidos como soluciones a la corrupción, y la problemática de la violencia de género. El análisis cuantitativo desarrollado, que se basa en cinco dimensiones (institucionalidad política,

* Profesor Asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid. Email: ecarreño@uchile.cl.  ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5587-1116>

** Profesora Asociada del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Doctora en Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid. Email: mjhenriq@uchile.cl.  ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1474-9982>

proceso político, calidad de gobierno, inserción internacional y procesos económicos), indica que ciertas subregiones concentran mayores niveles de riesgo, mientras que otras evidencian una mayor estabilidad. Finalmente, el artículo enfatiza la urgencia de adoptar un nuevo paradigma de seguridad centrado en las personas, una democratización efectiva y pactos sociales inclusivos para construir una paz duradera y sostenible, priorizando la gobernanza local y la participación de jóvenes y mujeres.

Palabras clave: Riesgo político – África, gobernanza – conflicto – seguridad – desarrollo.

ABSTRACT

This article examines political risk in Africa, emphasizing its marked heterogeneity and refuting the idea of a monolithic "African risk." This risk is shaped by foundations of unconcluded colonial legacies and persistent governance failures, which are expressed through a complex interaction of internal and external factors. The widespread exclusion of youth, the impact of the "resource curse," the effects of climate change, and the growing interference of foreign actors converge as fundamental catalysts of the instability that characterizes diverse regions of the continent.

The study reveals that, although the region has experienced a general deterioration in its stability, there are marked contrasts, with some areas showing institutional resilience while others are immersed in conflicts. Various security crises are examined, including the increase in terrorism in several areas, military coups that are often perceived as solutions to corruption, and the problem of gender-based violence. The quantitative analysis developed, which is based on five dimensions (political institutions, political process, quality of government, international integration, and economic processes), indicates that certain sub-regions concentrate higher levels of risk, while others show greater stability. Finally, the article emphasizes the urgency of adopting a new security paradigm focused on people, effective democratization, and inclusive social pacts to build lasting and sustainable peace, prioritizing local governance and the participation of youth and women.

Keywords: Political risk – Africa, governance – conflict – security – development.

INTRODUCCIÓN

El riesgo político en África ha adquirido una centralidad ineludible en la agenda internacional, tanto por su impacto en la estabilidad institucional y la seguridad humana como por sus implicancias en la inversión, el desarrollo y la gobernanza democrática. Al respecto, los países africanos hoy se configuran como un espacio de contrastes extremos: combinan avances puntuales en materia de paz y estabilidad con la persistencia (y agravamiento en algunos casos) de focos críticos de violencia, terrorismo e inestabilidad política.

De acuerdo al Índice de Paz de Global (IPG)¹ de 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), la región registró el último año un deterioro en su estabilidad. Este dato oculta una dinámica interna fuertemente heterogénea: mientras la mitad de los países mejoró sus niveles de paz, la otra mitad experimentó retrocesos; y tres de los diez países menos pacíficos del mundo se concentran precisamente en esta parte del mundo (IEP, 2025). En este contexto, el objetivo de este artículo es analizar de manera sistemática las principales tendencias regionales de riesgo político en África y explorar posibles escenarios de evolución a corto y mediano plazo. Para ello, se toma como punto de partida la evidencia reciente sobre el desempeño de los países de la región en materia de paz, seguridad y conflictividad, con especial atención a la diversidad de trayectorias nacionales y a los factores estructurales y coyunturales que las explican.

África enfrenta hoy un entramado complejo de crisis de seguridad, entre las que destaca el auge del terrorismo y la inestabilidad política en el Sahel Central. Burkina Faso constituye un caso paradigmático: registra actualmente el mayor impacto del terrorismo a nivel mundial, y seis de los diez países más afectados por esta amenaza se localizan en la región (IEP, 2025; Akinola, 2023). Ello se refleja

1 El IPG cuantifica el nivel de paz negativa de un país a través de tres dimensiones. La primera, *conflicto doméstico e internacional en curso*, emplea seis indicadores estadísticos para evaluar el grado, rol y duración de la participación de un país en conflictos internos y externos. La segunda dimensión, *seguridad social y ciudadana*, utiliza once indicadores para determinar el nivel de armonía o discordia dentro de una nación y se postula que la paz se correlaciona con bajas tasas de criminalidad, actividad terrorista y manifestaciones violentas mínimas, relaciones armoniosas con países vecinos, un panorama político estable y una baja proporción de población desplazada internamente o refugiada. Finalmente, la dimensión de *militarización*, compuesta por seis indicadores adicionales, examina la relación entre el desarrollo militar de un país, el acceso a armas y su nivel de paz, tanto a escala nacional como internacional. Esta dimensión incluye datos comparables sobre el gasto militar como porcentaje del PIB, el número de oficiales de las fuerzas armadas per cápita y las contribuciones financieras a las misiones de paz de las Naciones Unidas.

en el deterioro de los ámbitos de militarización y conflictos en curso, mientras que el componente de seguridad y protección ha mostrado una leve mejora en el último año. Paralelamente, los conflictos continúan traspasando las fronteras nacionales, como lo evidencia el empeoramiento del indicador de conflictos externos: en los últimos cinco años, la mayoría de los países de África se ha visto involucrada en al menos un conflicto interestatal, lo que revela un entorno regional altamente volátil e interconectado (IEP, 2025).

No obstante, el mapa del riesgo político africano no es homogéneo. Existen también experiencias de relativa estabilidad que permiten matizar los diagnósticos más pesimistas. Mauricio se mantiene, por muchos años consecutivos, como el país más pacífico de África. A pesar de un ligero deterioro reciente en su nivel general de paz, sigue siendo el único país de la región que no ha participado en conflictos internos ni externos en el último tiempo (IEP, 2025). Su reciente transición política, caracterizada por una transferencia fluida del poder tras la contundente victoria de la oposición, reforzó las instituciones democráticas y se vio apuntalada por un crecimiento económico sostenido y un sólido sector turístico. Este contraste sugiere que la combinación de instituciones inclusivas, estabilidad macroeconómica y alternancia política ordenada puede reducir de manera significativa el riesgo político.

En el extremo opuesto, la República Democrática del Congo (RDC) representa el caso más crítico de la región, al situarse como el país menos pacífico de África y uno de los menos pacíficos del mundo. Durante el último año, la RDC registró deterioros en los tres ámbitos del IPG y una caída general en sus niveles de paz, en un contexto marcado por la guerra contra el “Movimiento 23 de marzo (M23)”, presuntamente respaldado por fuerzas ruandesas (IEP, 2025; Iñiguez de Heredia, 2017). La estimación de las Naciones Unidas de miles de soldados de Ruanda operando en territorio congoleño ilustra el grado de internacionalización del conflicto y la fragilidad de las fronteras políticas y de seguridad en la región.

A partir de estos contrastes, el artículo se propone, en primer lugar, identificar los patrones regionales de riesgo político en África; en segundo lugar, examinar los determinantes internos y externos que explican la divergencia de trayectorias nacionales; y, en tercer lugar, delinear escenarios plausibles de evolución del riesgo político a corto y mediano plazo. El análisis combina datos comparados con una lectura contextual de los casos seleccionados, con el fin de aportar herramientas analíticas útiles tanto para la academia como para los responsables de políticas públicas y los actores internacionales interesados en comprender y anticipar las dinámicas de inestabilidad en la región (Gould-Davies, 2025).

MARCO HISTÓRICO, CONCEPTUAL Y ANALÍTICO

Analizar la situación de África en el sistema internacional exige una exploración multifacética de la compleja intersección entre gobernanza, conflicto y seguridad. El continente se ha convertido en un laboratorio donde convergen legados coloniales no resueltos, transiciones democráticas incompletas, economías extractivistas, violencia estructural y nuevas formas de intervención geopolítica. Pese a la retórica “afro-optimista”, la realidad cotidiana de amplios sectores de la población sigue marcada por la precariedad, la inseguridad y la ausencia de un contrato social inclusivo. La disminución relativa de las guerras civiles clásicas no ha supuesto una pacificación estructural: han emergido formas más difusas y persistentes de violencia, como el terrorismo, la xenofobia, la violencia de género, los conflictos por recursos y el descontento juvenil (Duffield, 2001); que revelan la progresiva incapacidad de muchos Estados africanos para garantizar la paz y la seguridad dentro de sus propias fronteras.

Esta constatación obliga a cuestionar seriamente la arquitectura de paz liberal aplicada en África desde finales de la Guerra Fría, basada en la combinación de elecciones multipartidistas, reformas de mercado y misiones internacionales de mantenimiento de la paz, pero que a menudo ha ignorado las especificidades históricas, las asimetrías

de poder internas y los legados coloniales que estructuran la conflictividad en el continente (Mateos y Grasa, 2014; Mateos, 2009; Ruíz-Giménez, 2003). Al mismo tiempo, la incapacidad de los Estados para proveer empleo digno, educación de calidad y canales efectivos de participación política ha convertido al bono demográfico africano en una espada de doble filo.

Con más del 60% de la población por debajo de los 25 años y un desempleo juvenil que ronda también el 60% en muchos países, amplios sectores juveniles se sienten excluidos de los beneficios del crecimiento económico y de los repertorios formales de ciudadanía (UNDP, 2025; AfDB/AUC/ECA, 2025). Esta exclusión material y simbólica no sólo alimenta la protesta social, sino también se traduce en la incorporación de jóvenes a milicias, grupos insurgentes o redes criminales. La violencia se convierte en un medio de subsistencia, una forma de reclamar reconocimiento o canalizar el resentimiento frente a élites que se perciben como saqueadoras (Duffield, 2001).

En contextos donde la represión estatal es la respuesta casi automática a la protesta, el espacio público se transforma en una arena de confrontación prolongada. Expectativas frustradas, violencia y nuevas oleadas de movilización terminan profundizando

la desconfianza hacia las instituciones, así como radicalizando a segmentos de la juventud que dejan de percibir la vía democrática como un camino viable de cambio. El movimiento #EndSARS, surgido para denunciar la violencia y extorsión de una unidad policial especial, mostró que la represión no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una cultura política autoritaria que sobrevivió a la transición formal a la democracia (Aubyn y Frimpong, 2022). De mismo modo, el movimiento #Fees-MustFall en Sudáfrica, aunque centrado en el costo y la mercantilización de la educación superior, puso en evidencia el profundo malestar de una generación que percibe que las promesas del post-apartheid no se han traducido en igualdad sustantiva (Gukurume y Maringira, 2022).

En este entramado se vuelve evidente la intrincada relación entre seguridad, gobernanza y desarrollo. Somalia constituye un caso paradigmático: décadas de guerra civil, colapso institucional y fragmentación territorial han dado lugar a un escenario en el que la ausencia de un Estado funcional se combina con la presencia de actores armados no estatales, como Al-Shabaab, que disputan el control del territorio, las rentas y las lealtades comunitarias (Arconada, 2023). Sin embargo, el contraste con Somalilandia permite matizar cualquier lectura simplista que atribuya la violencia somalí únicamente a factores

“culturales” o a una supuesta incapacidad africana para la gobernanza.

Pese a carecer de reconocimiento internacional, Somalilandia ha logrado construir estructuras políticas relativamente estables, combinar instituciones tradicionales con mecanismos modernos de representación y mantener niveles de seguridad superiores a los del resto de Somalia. Este contraste sugiere que la clave no reside sólo en la forma jurídica del Estado, sino en su grado de apropiación social, en la densidad de los pactos políticos internos y en la capacidad de articular gobernanza desde abajo, incorporando a actores comunitarios y autoridades tradicionales (Fagioli, 2024). La experiencia somalilandesa también recuerda que la rigidez del sistema internacional respecto al reconocimiento estatal puede entrar en tensión con lógicas locales de construcción de orden y legitimidad (Campos, 2000; Peñas, 2000; Peñas, 1994).

La llamada “maldición de los recursos” se inserta en este panorama como un eje estructural de la violencia y la mala gobernanza. Países como Zimbabwe, la RDC o Nigeria ilustran cómo la abundancia de riquezas naturales ha sido más un factor de desestabilización que de prosperidad compartida. La captura del Estado por élites depredadoras, a menudo aliadas con fuerzas de seguridad, empresas extranjeras y redes criminales, transforma los yacimientos minerales o petroleros en

nodos de confrontación armada. En lugar de servir como palanca para financiar políticas sociales, los recursos se convierten en botín a disputar, alimentando economías de guerra, clientelismo y corrupción endémica (Carreño y Martínez, 2016; Peñas, 1994). La convergencia entre intereses extractivos locales y capital transnacional perpetúa un modelo de acumulación que profundiza la desigualdad y erosiona aún más la legitimidad estatal.

En la RDC, la explotación de coltán, oro y otros minerales ha estado asociada a grupos armados, empresas privadas y actores regionales que se benefician de la inestabilidad. Zonas formalmente “controladas” por el Estado conviven con territorios donde la presencia estatal es meramente nominal y la autoridad real descansa en señores de la guerra, mandos militares o empresas de seguridad privadas (Iñiguez de Heredia, 2017; Prunier, 2009). Algo similar ocurre en zonas petroleras de Nigeria, donde la alianza entre élites políticas, fuerzas de seguridad y compañías multinacionales ha generado enclaves altamente militarizados, en los que la población local sufre contaminación, desplazamientos y represión cuando reclama una redistribución justa de los beneficios (Carreño, 2015). La violencia, en estos casos, no es un subproducto accidental del desarrollo, sino un mecanismo funcional para sostener un orden extractivo desigual.

La oleada reciente de golpes militares y el auge del terrorismo en distintas regiones africanas añaden más capas de complejidad a este panorama. A pesar de que numerosos Estados han incrementado su gasto militar, los conflictos violentos persisten, lo que sugiere que el problema no es sólo de capacidades materiales, sino de legitimidad, doctrina y relación entre fuerzas armadas y sociedad. Grupos como Boko Haram y su escisión ISWAP en Nigeria, así como organizaciones afines en el Sahel, han causado centenares de miles de desplazados, crisis alimentarias crónicas y una devastación económica que reconfigura patrones de movilidad y altera profundamente la vida cotidiana (Carreño, 2017). La respuesta estatal, basada en gran medida en operaciones militares convencionales y en estados de excepción prolongados, ha demostrado ser insuficiente e incluso contraproducente cuando no va acompañada de reformas de gobernanza, desarrollo local y mecanismos de justicia. El énfasis en la dimensión securitaria, desconectado de las raíces socioeconómicas y políticas del fenómeno, tiende a reforzar la desconfianza ciudadana y a ofrecer nueva munición propagandística a los grupos insurgentes.

Los golpes militares en Burkina Faso, Mali, Guinea o Sudán se inscriben en este contexto de crisis de legitimidad. Aunque formalmente condenados por la Unión Africana y por la comunidad internacional, algunos de

estos golpes han contado con sectores de apoyo social que los perciben como una corrección frente a gobiernos civiles vistos como corruptos, ineficaces o subordinados a intereses externos (Hosoi, 2025). Ello no implica que las juntas militares ofrezcan alternativas democráticas o emancipadoras; más bien pone de relieve la profunda erosión de la confianza en los procedimientos electorales como mecanismo suficiente para asegurar buena gobernanza (Carreño, 2014). La fatiga democrática se combina con la percepción de que las élites civiles han cooptado las instituciones para perpetuarse en el poder, manipulando constituciones, controles y contrapesos, así como instrumentalizando la justicia y las fuerzas de seguridad.

Las fronteras heredadas del reparto colonial de África siguen siendo un factor estructural de inestabilidad. Trazadas en la Conferencia de Berlín sin consideración por las realidades etnoculturales, estas fronteras agruparon sociedades diversas en entidades estatales nuevas y separaron a comunidades históricamente conectadas (Carreño y Martínez, 2015). La consecuencia no ha sido sólo la proliferación de conflictos internos y secesionistas, sino también un conjunto de tensiones menos visibles que emergen, por ejemplo, en forma de xenofobia. En Sudáfrica, la violencia contra migrantes africanos procedentes de Zimbabue, Mozambique, Nigeria o Somalia se ha convertido

en un grave problema de seguridad y un instrumento de movilización política. Líderes locales y partidos han alimentado la narrativa de que los “extranjeros” roban empleos, servicios o recursos y merecen ser expulsados, desviando la atención de los fracasos en materia de redistribución, servicios básicos y generación de empleo (Pong, 2020). La securitización de la migración africana dentro del propio continente refleja hasta qué punto la herencia colonial de división y jerarquización ha sido internalizada por los propios Estados africanos, obstaculizando proyectos de integración regional y debilitando el ideal panafricanista (Obi y Andrews, 2025).

Dentro de este entramado de violencias, las mujeres ocupan una posición de vulnerabilidad estructural que sólo puede comprenderse desde una perspectiva de género interseccional. Aunque representan más de la mitad de la población, su presencia en los espacios de toma de decisiones políticas y en posiciones de liderazgo sigue siendo limitada. La violencia de género —en sus formas sexual, física, psicológica y económica— se ha convertido en una auténtica emergencia de salud pública y un problema de seguridad humana de dimensiones profundas, con implicaciones económicas, sociales y políticas (Ntububa, 2020). En muchos contextos africanos, la violencia de género está normalizada por normas patriarcales, prácticas consuetudinarias y marcos jurídicos débiles o mal implementados

(Konaré, 2000). La impunidad de los agresores y la revictimización de las mujeres que denuncian perpetúan un círculo vicioso en el que el cuerpo femenino se convierte en un campo de batalla simbólico y material.

En situaciones de conflicto armado, esta vulnerabilidad se intensifica: la violencia sexual es empleada como arma de guerra, instrumento de humillación colectiva y mecanismo para desestructurar comunidades (Ntububa, 2020). La marginalización socioeconómica de las mujeres, que a menudo son agricultoras y principales proveedoras de alimentos, se ve agravada por el deterioro ambiental, el desplazamiento forzado y la destrucción de medios de vida. Ello no sólo incrementa su exposición a la explotación, sino que limita su participación en procesos formales de paz y reconstrucción. Aunque marcos como la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han impulsado la agenda de “mujeres, paz y seguridad”, su traducción en políticas efectivas sigue siendo parcial y frágil frente a estructuras patriarcales profundas.

El cambio climático añade una dimensión transversal a este conjunto de crisis. La relación entre degradación ambiental, escasez de recursos y conflicto se ha vuelto particularmente evidente en regiones como el Sahel y el norte de Nigeria, donde la desertificación, el aumento de temperaturas y la

variabilidad de las lluvias intensifican las tensiones entre pastores y agricultores (Tarif, 2023). Las disputas por el acceso al agua, pastizales y tierras cultivables se insertan en historias más largas de marginación, discriminación y mala gobernanza, de modo que fenómenos climáticos se convierten en multiplicadores de conflictos preexistentes. El resultado se traduce en desplazamientos, pérdida de vidas y crisis alimentarias que golpean, de nuevo, con especial dureza a mujeres, niñas y otros grupos vulnerables.

La disminución de humedales estratégicos, como el delta interior del Níger en Mali, reduce la biodiversidad y la productividad agrícola en zonas ya atravesadas por conflictos armados (Meijer et.al., 2024) cerrando aún más el margen de maniobra para estrategias de subsistencia tradicionales (Tarif, 2023). En contextos de pobreza estructural, la capacidad de adaptación al cambio climático es extremadamente limitada, y la ausencia de políticas públicas robustas agrava la situación. Los Estados con instituciones frágiles y escasa legitimidad difícilmente pueden diseñar e implementar planes de mitigación y adaptación de largo plazo, de modo que la respuesta suele ser reactiva, fragmentaria y dependiente de la cooperación internacional. El círculo se completa cuando la competencia por recursos menguantes alimenta nuevas formas de militarización y

refuerza la lógica del control coercitivo del territorio.

Sobre este telón de fondo de crisis múltiples se despliega además una renovada “lucha” por África entre potencias externas. Francia, China, Rusia y Estados Unidos, entre otros actores, han intensificado su presencia militar, económica y política en el continente no sólo en busca de recursos, sino también de influencia geopolítica y ventajas estratégicas (Lebakeng, 2023). Las bases militares, los acuerdos de seguridad, los contratos extractivos y las alianzas con regímenes cuestionados desde el punto de vista democrático configuran un escenario de “neocolonialismo competitivo” que complejiza aún más las dinámicas internas de seguridad y soberanía.

Francia mantiene una presencia militar extensa en el Sahel y en sus antiguas colonias, articulada en nombre de la “lucha contra el terrorismo”, pero a menudo percibida por sectores locales como una prolongación de la tutela colonial y una injerencia en los asuntos internos. Estados Unidos, por su parte, despliega capacidades de inteligencia, drones y entrenamiento militar a través de iniciativas como AFRICOM, bajo la lógica de la seguridad global y la contención del extremismo. China ha aumentado significativamente sus inversiones en infraestructura, minería y energía, combinándolas con la creación de su primera base militar en Yibuti, mientras Rusia ha recurrido tanto

a acuerdos bilaterales como al uso de compañías militares privadas para ganar influencia en países en crisis (Telci y Sefkatli, 2024). Estas dinámicas externalizadas tienden a reforzar élites locales dispuestas a intercambiar concesiones económicas o estratégicas por apoyo político y militar, sin que ello se traduzca en mejoras palpables de seguridad humana para la población. La gobernanza de la seguridad termina así condicionada por agendas foráneas, lo que erosiona aún más la soberanía efectiva y limita la capacidad de los Estados africanos para definir prioridades propias en materia de desarrollo y construcción de paz.

En este punto, resulta imprescindible volver a la reflexión crítica sobre las raíces históricas de la violencia y la inestabilidad en África (Neila, 2009). Los conflictos contemporáneos no pueden entenderse como simples manifestaciones de interacciones humanas “normales”, ni como expresión de una supuesta predisposición cultural al conflicto. Siguiendo las contribuciones de autores como Mahmood Mamdani (1996) y Frantz Fanon (1967), cobra fuerza la tesis de que la arquitectura del Estado africano moderno, forjada bajo el yugo colonial, sembró las bases estructurales de muchos de los problemas actuales. Las fronteras arbitrarias, la instrumentalización de identidades étnicas, la creación de jerarquías raciales y la implantación de sistemas de gobierno indirecto produjeron sociedades profundamente fracturadas, en

las que la ciudadanía se distribuía de manera desigual y la ley se aplicaba de forma selectiva. Como subraya Mamdani (1996), el modelo colonial británico de “gobierno indirecto” dividió el espacio político en un mundo bifurcado: un orden civil para los colonizadores y un orden consuetudinario, muchas veces despótico, para los “nativos”. Esta dualidad jurídica racializada no desapareció con las independencias, sino que fue reciclada bajo nuevas formas, reproduciendo lógicas de exclusión y arbitrariedad.

Fanon (1967), por su parte, advirtió que una descolonización meramente formal —centrada en sustituir a los administradores europeos por élites nacionales sin transformar los cimientos del Estado— estaba destinada al fracaso. La violencia de la que habla no es sólo física, sino estructural: designa la necesidad de una ruptura radical con el mundo maniqueo colonial, para construir un orden basado en una ciudadanía igualitaria, desracializada y destribilizada. En ausencia de esa ruptura, lo que se consolida es un Estado neocolonial, donde la antigua metrópoli (y hoy, otras potencias donde la antigua metrópoli (y hoy, otras potencias globales) siguen influyendo de manera decisiva en la economía y la seguridad, mientras las élites locales actúan como intermediarias de ese orden.

Esta lectura histórica no pretende negar la agencia de los actores africanos

ni reducir todos los problemas al legado colonial, pero sí subraya que cualquier análisis serio de la gobernanza, el conflicto y la seguridad en África debe partir de la comprensión de cómo se configuraron las instituciones, las identidades políticas y las economías durante la colonización y la transición fallida a la independencia (Komenan, 2020). Tampoco se trata de una política de victimización perpetua, sino de un esfuerzo crítico por desentrañar las continuidades entre colonialismo, neocolonialismo y formas contemporáneas de dominación, a fin de evitar que los modelos de reforma repitan, con otros nombres, las mismas lógicas excluyentes.

En síntesis, la compleja variedad de conflictos y desafíos de seguridad en África no puede desligarse de déficits históricos de gobernanza y de la persistencia de estructuras estatales heredadas, apenas reformadas. La fragilidad de muchos Estados, la captura de instituciones por élites clientelares, la militarización de la vida política y la subordinación de la seguridad humana a agendas externas han producido un escenario de inestabilidad crónica. Superarlo exige desplazar el foco de una seguridad centrada exclusivamente en el Estado hacia enfoques que coloquen en el centro a las personas y a las comunidades, integrando a la sociedad civil, los movimientos juveniles, las organizaciones de mujeres, los centros de pensamiento, las autoridades tradicionales

y otros actores no estatales en los procesos de toma de decisiones.

La Unión Africana y las organizaciones subregionales tienen un papel decisivo en esta reorientación, pero necesitan fortalecer su compromiso con la buena gobernanza, revitalizar sus sistemas de alerta temprana y dotarse de mecanismos eficaces y políticamente independientes de prevención de conflictos, supervisión electoral y sanción de rupturas del orden constitucional (Cuadrado, 2016). Del mismo modo, las intervenciones internacionales deben dejar de reproducir esquemas de arquitectura de paz liberal descontextualizados y orientarse hacia soluciones co-diseñadas con los actores locales, que atiendan a las causas estructurales de la inseguridad, en lugar de limitarse a gestionar sus síntomas.

El futuro de la gobernanza, el conflicto y la seguridad en África dependerá crucialmente de la capacidad endógena de sus sociedades para reconfigurar el Estado, trascendiendo los moldes coloniales y neocoloniales. Esto exige una democratización genuina del poder, la desmilitarización de la política y la efectiva canalización del bono demográfico juvenil hacia la transformación socioeconómica, evitando la violencia. La materialización de este horizonte pasa por una inversión estratégica y sostenida en capital humano, priorizando el empoderamiento de jóvenes y mujeres, y estableciendo marcos robustos de rendición de cuentas que limiten la captura estatal y la corrupción, elementos que socavan la legitimidad institucional.

ANÁLISIS DE DATOS

En esta sección se evalúan por país aquellos factores que inciden en el logro de objetivos por parte de actores externos relevantes, especialmente, si se trata de potenciales inversionistas; aunque también este análisis permite obtener una mirada general de la situación de los países africanos. La evaluación que se realiza aquí se concentra en aspectos de origen político, es decir, en aquellas situaciones que pueden ocurrir producto de decisiones gubernamentales, acciones llevadas a cabo por

actores políticos no-gubernamentales (sean internos o externos), la respuesta (o falta de ésta), así como los arreglos institucionales establecidos.

Una evaluación de este tipo puede abordarse métodos cualitativos y cuantitativos. Considerando los objetivos de este trabajo, lo que se propone es una evaluación cuantitativa por país, la cual permitirá sacar conclusiones generales para las subregiones y para el continente como un todo. Con esto se

complementa adecuadamente el análisis histórico y cualitativo.

Esta evaluación cuantitativa implica la construcción de un índice único basado en un modelo de medición del riesgo. Así, el riesgo político corresponde a un constructo multidimensional, para el cual se buscan indicadores que lo reflejan en forma observable (Campisi, Meissner y Sottolotta, 2025; Floyd, 2025). Conceptualmente, el riesgo refiere a situaciones que pueden ocurrir en el futuro, las cuales no son observables. En lo referido al método, el supuesto central es que el riesgo depende de condiciones presentes, las cuales sí son observables. Así, la medición se basará en evaluaciones sobre el estado actual.

Se consideró que el riesgo político se despliega en cinco dimensiones diferentes. En primer lugar, la institucionalidad política, asumiéndose que los Estados con instituciones democráticas mejor asentadas ofrecen mejores perspectivas y menor riesgo. En segundo lugar,

proceso político, dimensión que complementa la anterior y supone que -si las instituciones son relativamente fijas- el proceso político es lo que cambia dentro de tal institucionalidad. Consideramos que mayor inestabilidad implica mayor riesgo. En tercer lugar, se consideró la calidad de gobierno, es decir, su efectividad y capacidad para hacer frente a fuerzas negativas. En cuarto lugar, se incluyó la inserción internacional, entendida como el grado en que el país está integrado de manera funcional al sistema internacional. Por último, se incluyeron los procesos económicos, entendidos como las condiciones que el sistema político provee al actuar de los agentes económicos, especialmente desde el punto de vista de la normativa interna. Un país de mayor riesgo será menos permeable a iniciativas económicas. Los indicadores de cada dimensión se reúnen posteriormente en una medición de riesgo que es única por país, preparada especialmente para este trabajo (Tabla N° 1).

Tabla N° 1: Variables componentes del índice riesgo político

Dimensión	Variable
Institucionalidad política	- Estado de Derecho - Libertades civiles - Limitaciones legislativas al Poder Ejecutivo
Proceso político	- Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo - Movilización de masas

Calidad de gobierno	- Efectividad de gobierno - Calidad regulatoria - Corrupción política - Resiliencia al crimen organizado
Inserción internacional	- Militarización - Cooperación internacional - Ayuda internacional para el comercio
Procesos económicos	- Globalización económica - Transformación económica - Acceso a servicios financieros - Facilidad de hacer negocios - Libertad de inversión

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de las variables utilizadas para medir el índice, éstas proceden de fuentes secundarias diversas, validadas por la comunidad experta. En prácticamente todos los casos, corresponden a índices calculados por cada fuente, que a su vez consideran varios indicadores. Para efectos de este estudio, son medidas únicas que se integran con otras en el modelo de medición. En total, nuestra medición de riesgo político incluye 17 variables procedentes de nueve fuentes diferentes. Éstas se publican periódicamente y, para efectos de este trabajo, tomamos el último año disponible. El puntaje de riesgo se obtiene promediando las puntuaciones estandarizadas de cada variable, con igual peso cada una en el promedio y con todas apuntando en la misma dirección (países más dañados obtienen mayores puntajes en

cada variable) y se entrega en escala de puntaje z, con media igual a cero. Se consideró el puntaje solamente en los casos en que se cuenta con información completa de todos las variables, que en conjunto entregan información de 46 de los 53 países del continente². El resultado es satisfactorio desde el punto de vista de medición³. Para efectos de conocer la evolución en el tiempo, se tomó un subconjunto de variables con las cuales se cuenta con una serie de tiempo larga, la cual comienza en 1900 para algunos países y posteriormente a

2 Se excluyen por falta de información los siguientes países: Cabo Verde, Comoras, Eritrea, Libia, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles y Somalia.

3 Se excluyen por falta de información los siguientes países: Cabo Verde, Comoras, Eritrea, Libia, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles y Somalia.

medida que fueron agregándose Estados⁴. En el anexo A se presenta detalladamente la definición de cada variable conforme a la fuente que la difunde.

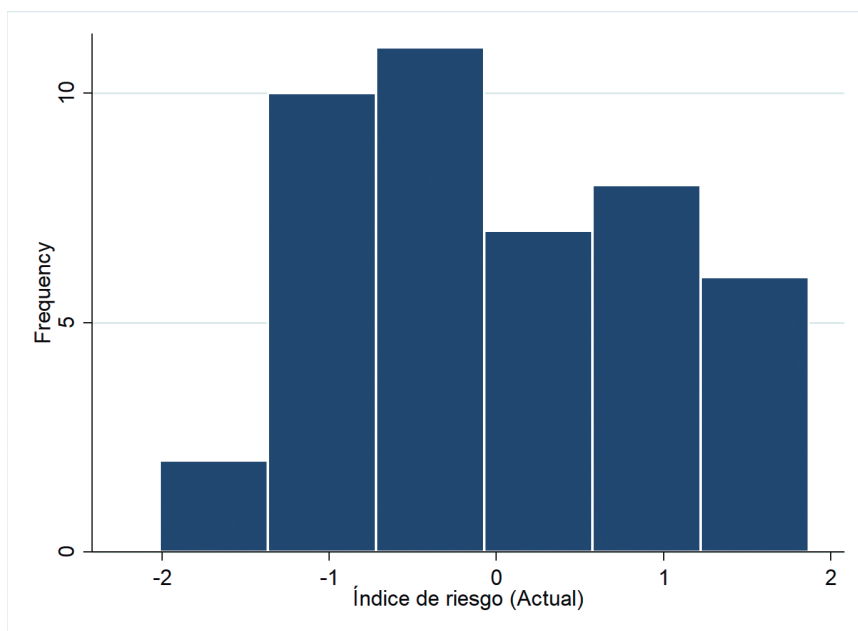
El riesgo político actual en África

Como resultado de este ejercicio de medición, la figura N°1 presenta un resumen de los resultados por país, para el año 2024, del índice de riesgo actual. Mayores puntajes indican mayor nivel de riesgo. Se aprecia que los países no se distribuyen simétricamente respecto

de una tendencia central, pese a que aproximadamente la mitad de los países se ubica por debajo de la media. El intervalo modal (de mayor frecuencia) es de mayor riesgo relativo, aunque son escasos los países de muy alto riesgo, a diferencia de los países de muy bajo riesgo, que son más frecuentes.

La figura N°2 muestra los resultados de riesgo conforme a la situación actual por país. Los menores niveles de riesgo se observan, en orden ascendente, en Mauricio, Botsuana, Namibia, Senegal y Túnez. Por el contrario, los países de mayor

Figura N°1: Distribución de países del continente por niveles de riesgo político actual

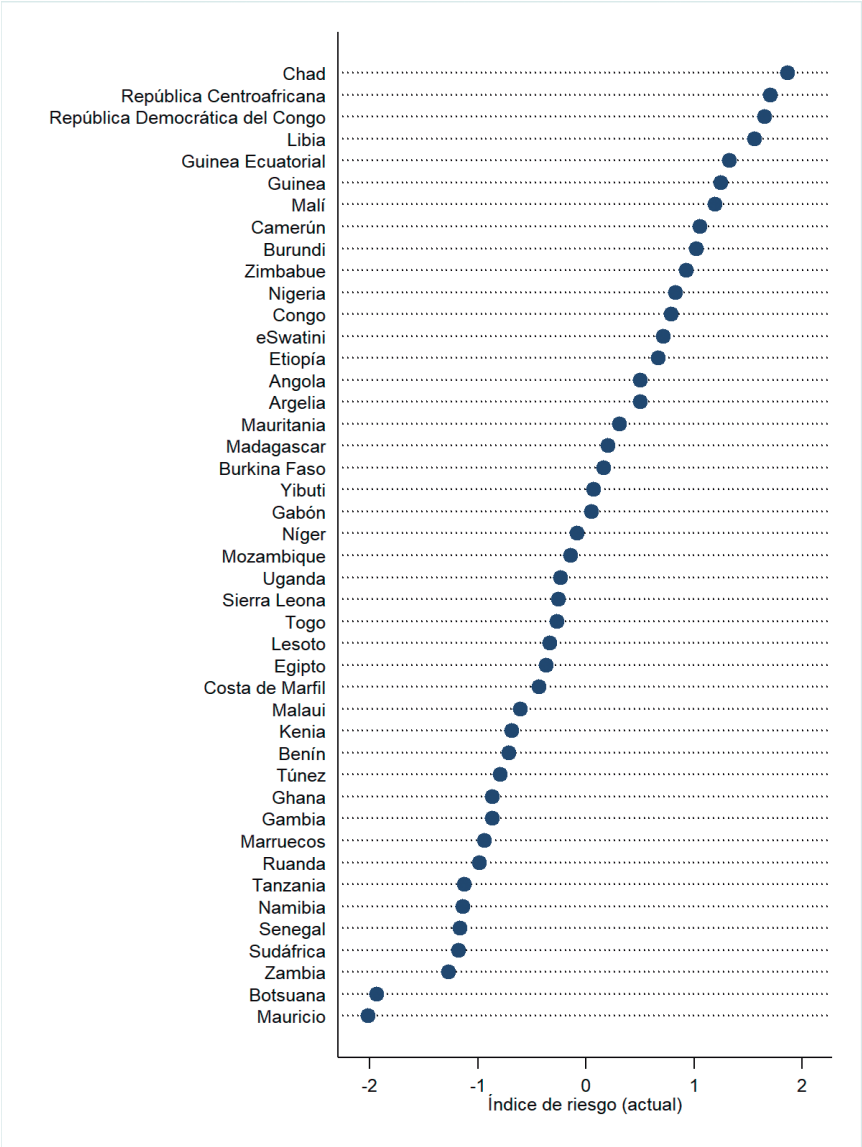


Fuente: Elaboración propia.

4 Ambos índices de riesgo muestran una correlación lineal de 0,84.

riesgo político, en orden descendente, fueron RDC, Chad, República Centroafricana, Burundi y Camerún. Los países que ocupan la posición intermedia (mediana), son Uganda y Mozambique.

Figura N°2: Niveles de riesgo político actual por país

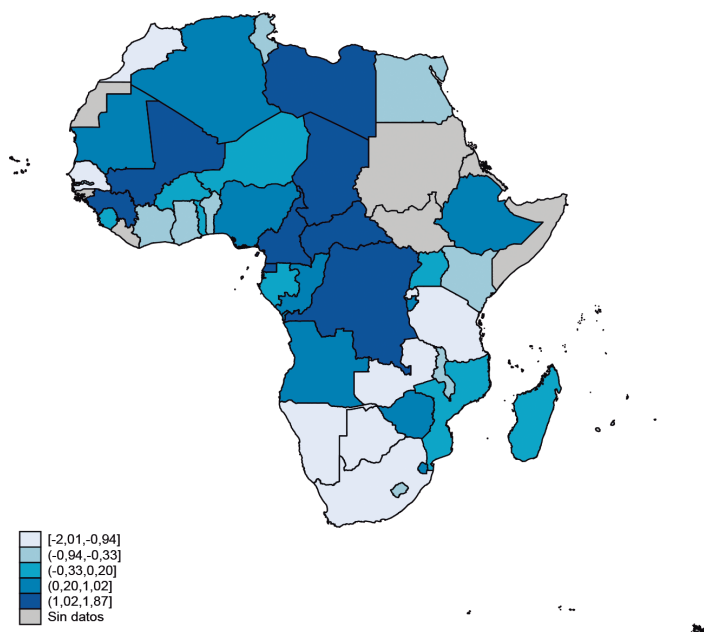


Fuente: Elaboración propia.

El riesgo no está homogéneamente distribuido a lo largo y ancho del continente. La figura N°3 muestra la distribución del riesgo en el territorio, en que los países han sido separados en cinco intervalos y los colores más

oscuros representan mayores niveles de riesgo político actual. A simple vista, se observa que países más centrales muestran mayores niveles de riesgo político actual, mientras que los países más australes tienden a tener el menor riesgo.

Figura N°3: Niveles de riesgo político actual por país



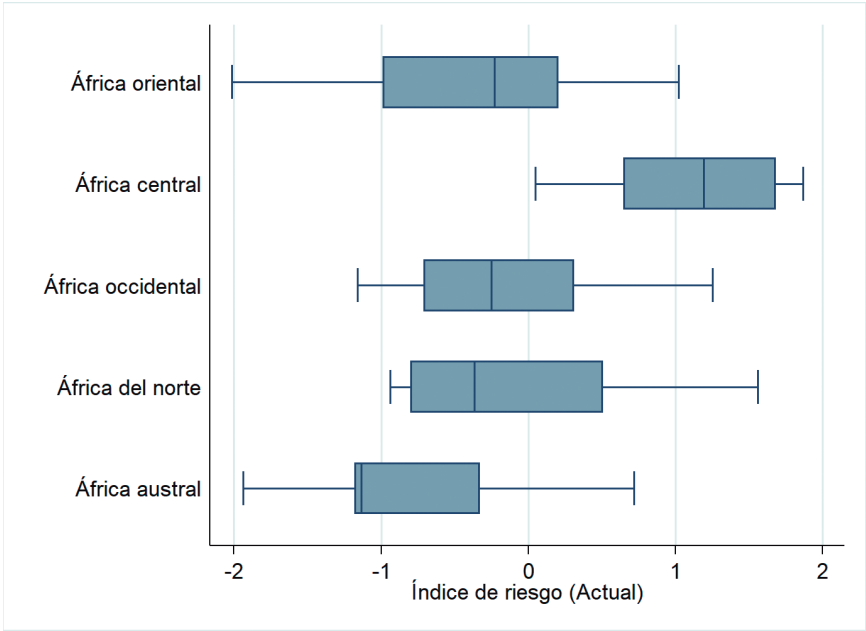
Fuente: Elaboración propia.

Para resumir lo anterior, examinaremos la situación por las cinco subregiones de África. La figura N°4 muestra la distribución del puntaje de riesgo actual, usando la técnica de representación de caja, separando según subregión. Lo primero que llama la atención son los ocho países del África Central, que no sólo presentan en promedio los

mayores niveles de riesgo, sino también la menor dispersión: es una subregión sólidamente de alto riesgo político. Todas las otras regiones tienen un promedio menor a la media continental, aunque muestran mayor dispersión. En el otro extremo está el África Austral, con una situación bastante mejor en promedio, aunque con países en niveles de

riesgo político preocupantes (Lambrechts, 2025). La otra subregión llamativa es África del Norte, que muestra la mayor dispersión: encierra una gran diversidad de riesgo político en su interior.

Figura N°4: Distribución de riesgo político actual, según subregión



Fuente: Elaboración propia.

El riesgo político en perspectiva histórica

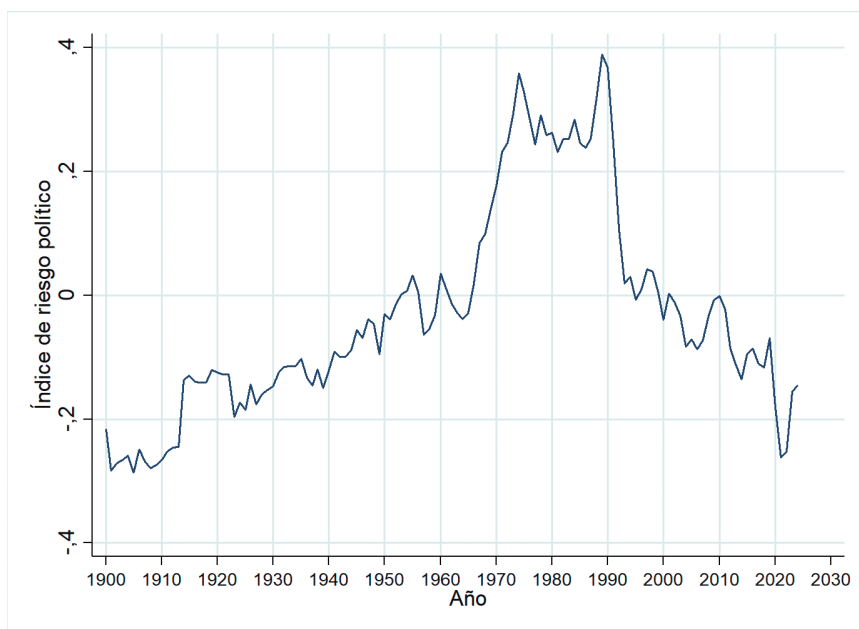
¿Cómo se compara la situación actual de riesgo político con la observada en otros momentos? La figura N°5 muestra la serie histórica de un índice de riesgo político menos complejo que el índice que evalúa el riesgo actual, en que mayores valores indican mayor riesgo y menores

valores indican mayor predictibilidad en el desarrollo político, promediando el resultado de todos los países del continente para cada año. El riesgo político aumentó sostenidamente a lo largo del siglo hasta la década de 1960. A finales de esa década se observa un alza brusca en el riesgo político, hasta aproximadamente 1974. Posteriormente a ese año, la situación es relativamente inestable. La mejora en la situación de riesgo político es

igualmente súbita que el alza, bajando bruscamente entre 1989 y 1993, para luego proseguir una marcha de

disminución progresiva, especialmente marcada entre 2019 y 2021.

Figura N°5: Evolución del nivel de riesgo político promedio del continente, 1900-2024

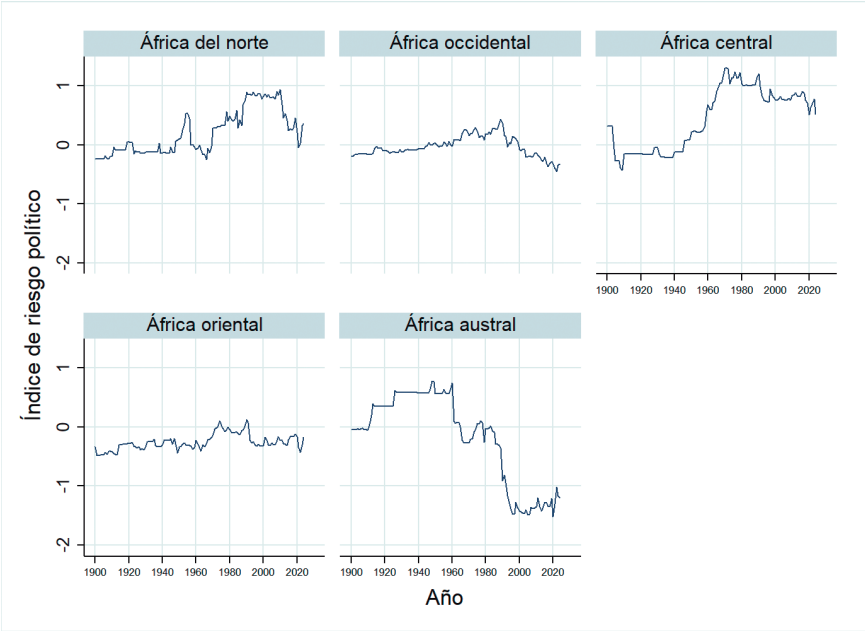


Fuente: Elaboración propia.

Un análisis más detallado puede hacerse comparando las subregiones del continente, para las cuales ya constatamos diferentes perfiles de riesgo político. ¿Cuál ha sido la tendencia a lo largo del tiempo? La figura N°6 muestra la tendencia desde 1900, considerando el nivel promedio de riesgo en cada subregión. Las tendencias son muy diferentes. África Occidental muestran niveles relativamente estables a lo largo del siglo, aunque en el caso de África Occidental sea mayor el riesgo. Con todo, se observa una tendencia a la baja en

las últimas décadas. Por su parte, África del Norte muestra bastante variación, con décadas en cierto nivel, seguidas por un alza de riesgo, que se empieza a revertir recientemente. En África Central dicha alza prácticamente no revierte, además de haber llegado a niveles mucho mayores. Por último, destaca el caso del África Austral, que muestra malos niveles de riesgo por décadas en el siglo XX, seguidas de una muy acusada disminución, llegando a estabilizarse en una situación de bajos niveles de riesgo promedio.

Figura N°6: Evolución del nivel de riesgo político promedio, según subregión, 1900-2024

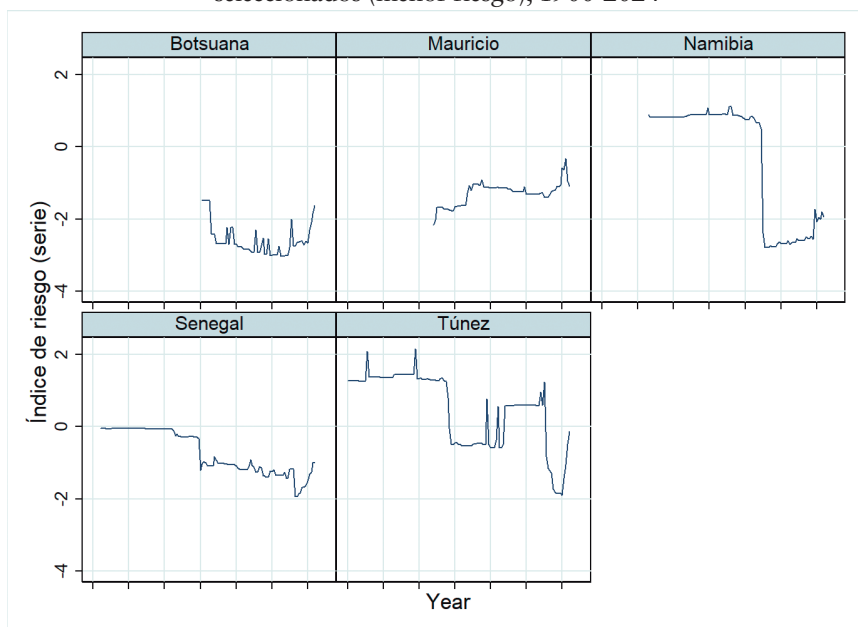


Fuente: Elaboración propia.

Conviene hacer un análisis un poco más detallado de los cinco países que mostraron los mejores (menores) niveles de riesgo político actual. Para ese efecto, la figura N°7 muestra la evolución desde 1900 de Botsuana, Mauricio, Namibia, Senegal y Túnez. Las trayectorias son interesantes. Botsuana comienza y termina bien, con pocas variaciones relevantes, excepto al principio. Mauricio es similar, pero muestra un alza en tiempos recientes. Senegal fue muchos años estable, luego tiene una mejora y se mantiene en ese nivel, con una disminución leve pero sostenida a lo largo de las décadas, excepto en la última, en que está empeorando,

pero luego de una mejora, volviendo así al nivel original. Los casos más llamativos son Namibia y Túnez. Namibia fue por décadas de alto nivel de riesgo, para después sufrir una baja súbita en el mismo, llegando a niveles bajos y manteniéndose ahí, excepto en la última década, en que hay mayor variabilidad. La trayectoria de Túnez es mucho menos nítida, pero parecida al caso de Namibia.

Figura N°7: Evolución de los niveles de riesgo político por país, países seleccionados (menor riesgo), 1900-2024

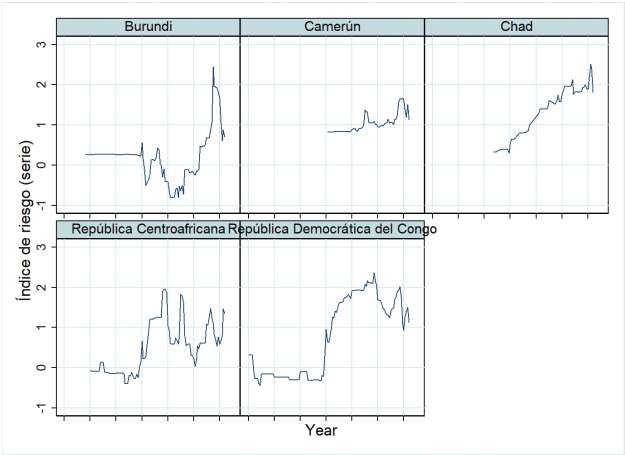


Fuente: Elaboración propia.

El mismo ejercicio conviene realizarlo respecto de los cinco países de mayor riesgo. La figura N°8 presenta la serie de tiempo en cada uno de los siguientes países: Burundi, Camerún, Chad, República Centroafricana y RDC. En tres casos (Burundi, Chad y RDC) se llegó a altos niveles de riesgo luego de un punto de partida de relativamente bajo riesgo (nótese que la escala vertical en el gráfico no es simétrica respecto del cero). En Burundi, los niveles de riesgo por décadas fueron promedio, para luego pasar a una mejora muy inestable que duró años, seguida de un empeoramiento sostenido en el tiempo, llegándose hasta niveles bastante altos

de riesgo. En Chad no hubo nunca un período de bajo riesgo y la situación ha ido empeorando sostenidamente desde el inicio. En la RDC, la trayectoria es parecida a la seguida por Burundi, pero el empeoramiento ocurrió bastante antes y ahora está en una situación de mejoras inestables. Por su parte, Camerún no ha enfrentado nunca una situación de bajo riesgo, pero tampoco lo ha empeorado forma súbita. Por último, en República Centroafricana no hay un patrón sostenido.

Figura N°8: Evolución de los niveles de riesgo político por país, países seleccionados (mayor riesgo), 1900-2024



Fuente: Elaboración propia.

En suma, es posible plantear varias ideas. Primero, lo que hoy se observa es parte de una realidad dinámica en el tiempo. Segundo, los resultados para el continente y las subregiones esconden importantes grados de diversidad entre países. Tercero, la complejidad del fenómeno amerita el desarrollo de métricas más complejas, como las recién compartidas.

El riesgo político y el desarrollo humano

Se ha planteado que habría una conexión entre los niveles de riesgo político y el desarrollo, especialmente el desarrollo económico. Para estudiar esto, el gráfico N°8 presenta la relación entre el

Índice de Desarrollo Humano (2025)⁵ y el índice de riesgo político actual. Cada punto representa un país (indicado por su código ISO de tres caracteres) y su ubicación depende de la puntuación que obtenga en ambas métricas.

La “nube de puntos” resultante muestra que efectivamente hay una relación negativa entre ambas variables. Mayores valores de desarrollo humano se asocian, en promedio, con menores niveles de riesgo. Se superpuso una línea de tendencia que representa esa relación⁶, la cual además se muestra que es lineal. Pero hay bastante

⁵ El Índice de Desarrollo Humano es provisto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Mide avance del país en tres dimensiones: vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno.

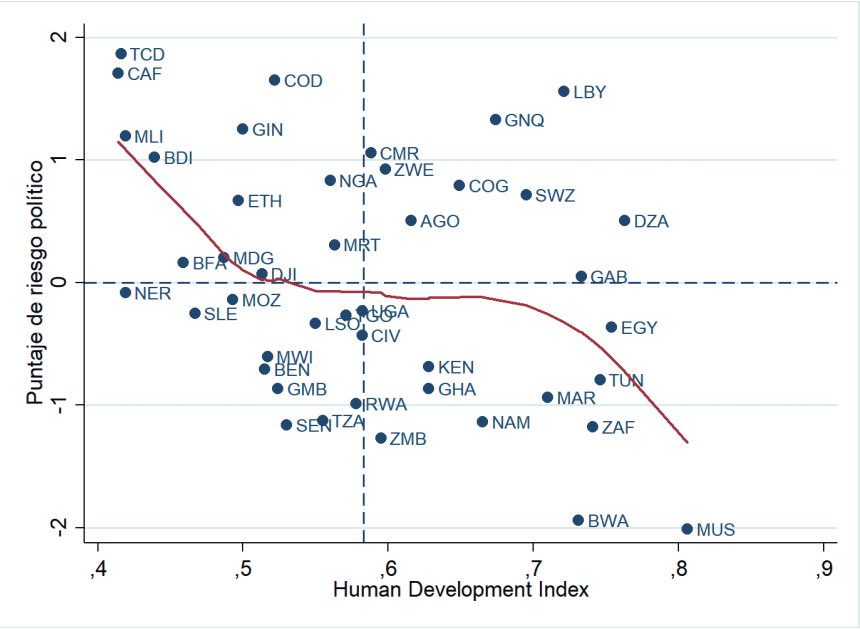
⁶ Estimación usando regresión local ponderada lowess.

dispersión por encima y por debajo de la línea. Considerando la correlación lineal entre ambas variables, el 28% de la variación en los niveles de riesgo obedece a la variación en desarrollo humano. En otras palabras, el desarrollo humano es un predictor importante del nivel de riesgo, pero no lo puede sustituir.

Para mayor claridad, en la figura N°9 se incluyeron líneas punteadas con

la media de cada variable. De haber una relación negativa más estricta, la mayor parte de los casos estarían o en el cuadrante superior izquierdo (bajo desarrollo y alto riesgo político) o en el cuadrante inferior derecho (alto desarrollo y bajo riesgo político). Pero observamos numerosos casos que muestran combinaciones discordantes.

Figura N°9: Relación entre riesgo político y desarrollo humano



Fuente: Elaboración propia.

CONSIDERACIONES FINALES

Las conclusiones fundamentales que se desprenden de este análisis de riesgo político en África trascienden la mera descripción de sus manifestaciones. La primera y más importante inferencia es la ineludible heterogeneidad del riesgo político en el continente. La idea de un "riesgo africano" monolítico es una simplificación peligrosa, ya que los datos demuestran que -si bien existen focos críticos de inestabilidad- hay también trayectorias de resiliencia y mejora significativa. Esta polaridad exige que las estrategias de intervención y análisis se alejen de enfoques generalistas para adoptar una mirada que reconozca las particularidades nacionales y subregionales. La dispersión del riesgo, con África Central como epicentro de alta inestabilidad y África Austral mostrando mayor estabilidad, subraya la necesidad de diagnósticos y soluciones adaptadas a cada contexto.

En segundo lugar, el estudio concluye que las raíces históricas y estructurales son determinantes ineludibles de la conflictividad actual. El legado colonial, con sus fronteras arbitrarias, la instrumentalización de identidades y la implantación de modelos de gobernanza que no desaparecieron con la independencia, sigue siendo el cimiento sobre el que se construyen muchos de los desafíos contemporáneos. Este análisis rechaza una visión ahistórica de los conflictos, argumentando que

la persistencia de élites extractivas, la fragilidad institucional y la incapacidad de muchos Estados para proveer bienes públicos básicos son consecuencias directas de estas continuidades históricas, no meras deficiencias coyunturales. La crítica a la arquitectura de paz liberal se convierte así en una conclusión central: su falta de anclaje en las realidades históricas y sociales ha limitado su eficacia y, en ocasiones, ha generado resultados contraproducentes.

Una tercera reflexión final es la convergencia y exacerbación mutua de múltiples crisis. El riesgo político en África no puede aislarse del bono demográfico, la gestión de recursos naturales, el cambio climático y la desigualdad de género. La masiva población juvenil, a menudo excluida de oportunidades económicas y políticas, no sólo es una preocupación social, sino un factor de riesgo político de primer orden, susceptible de movilización tanto para la protesta social como para la insurgencia armada. De igual modo, la maldición de los recursos y el impacto del cambio climático no son factores externos al ámbito político, sino catalizadores de conflictos existentes y generadores de nuevas tensiones, especialmente en regiones con gobernanza débil. El análisis destaca que estos elementos no actúan de forma lineal, sino que se retroalimentan, creando espirales de

inestabilidad que requieren un enfoque holístico e integrado.

En cuarto lugar, se infiere una crisis de legitimidad y soberanía que se manifiesta en la oleada de golpes militares y en la resiliencia del terrorismo. Los golpes militares, aunque condenados internacionalmente, a menudo encuentran cierto apoyo social al ser percibidos como una corrección ante la corrupción e ineficacia de gobiernos civiles. Esto revela una profunda erosión de la confianza en los procedimientos democráticos y en las instituciones existentes. Asimismo, la presencia de potencias externas y la competencia geopolítica por recursos e influencia complican aún más el panorama, limitando la capacidad de los Estados africanos para formular políticas autónomas y priorizar la seguridad humana. La gobernanza de la seguridad termina condicionada por agendas extrarregionales, lo que debilita aún más la soberanía efectiva.

Finalmente, la superación del riesgo político en África requiere un cambio de paradigma. No es sostenible una seguridad centrada exclusivamente en el control estatal o militar; se impone la necesidad de enfoques que coloquen a las personas, las comunidades y la sociedad civil en el centro. Esto implica fortalecer la gobernanza local, promover la inclusión de jóvenes y mujeres en la toma de decisiones, y revitalizar las organizaciones regionales africanas como la Unión Africana para que actúen como garantes efectivos de la

buena gobernanza y la paz. La correlación, aunque parcial, entre el Índice de Desarrollo Humano y el riesgo político subraya que el desarrollo integral y equitativo no es un complemento, sino una condición indispensable para la estabilidad política a largo plazo. El desafío, por tanto, radica en reconfigurar el Estado africano para que trascienda sus moldes coloniales, democratice genuinamente el poder y convierta su dinamismo demográfico en una fuerza transformadora positiva, construyendo pactos sociales que articulen justicia histórica, inclusión y sostenibilidad ambiental.

Sobre el artículo

Historia del artículo

Recibido: 3 de octubre de 2025

Aceptado: 15 de diciembre de 2025

Declaración de roles de autoría

Eduardo Carreño Lara: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, redacción, validación, escritura - borrador original, escritura - revisión & edición.

María José Henríquez Uzal: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, redacción, validación, escritura - borrador original, escritura - revisión & edición.

Declaración de conflicto de interés

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses que pudieran haber influido en la realización de esta investigación o en la preparación y publicación de este artículo.

Financiamiento

Este trabajo fue financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (MINREL) mediante el Concurso para el Desarrollo de Estudios de

Política Exterior Año 2023. Las opiniones presentadas en esta publicación, incluyendo los análisis e interpretaciones, son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la opinión del MINREL.

Nota

Agradecemos la asistencia de la señorita Antonia Vega Pacheco en la recopilación de datos actualizados.

REFERENCIAS

- African Development Bank [AfDB], African Union Commission [AUC] y United Nations Economic Commission for Africa [ECA]. 2025. *African Statistical Yearbook 2023*. <https://statafric.au.int/en/category/yearbooks>
- Akinola, A. O. (2023). *Contemporary Issues on Governance, Conflict and Security in Africa*. Palgrave Macmillan.
- Arconada, P. (2023). *Historia de Somalia*. Catarata.
- Aubyn, F.K. y Frimpong, O. B. (2022). Digital Activism, Transnational Support, and the EndSARS Movement in Nigeria. En Bangura, I. (ed.) *Youth-Led Social Movements and Peacebuilding in Africa* (pp. 69-85) Routledge.
- Campisi, J.; Meissner, H. y Sottillotta, C. (2025). Re-evaluating the Theoretical Foundations of Political Risk Analysis. The Crucial Role of Context. En Sottillotta, C.; Campisi, J.; Leitner, J. y Meissner, H. (eds.). *The Routledge Handbook of Political Risk*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003456117>
- Campos, A. (2000). La aparición de los Estados africanos en el sistema internacional: la descolonización de África. En Peñas, F. (ed.) *África en el Sistema Internacional* (pp. 15-50). Catarata.
- Carreño, E. (2017) Grandes desafíos, ¿mecanismos idóneos?: evolución del pensamiento estratégico de Nigeria tras la emergencia de Boko Haram. *Estudios Internacionales*, 49(186), 169-185. <https://doi.org/10.5354/0719-3769.2017.45223>
- Carreño, E. y Martínez, P. (2016). África Subsahariana en el Orden Internacional. *Revista de Occidente*, 418, 99-115.

- Carreño, E. y Martínez, P. (2015). Fronteras, minorías y seguridad en África. La situación de las regiones del Magreb y Sahel. En Algora, M. (ed.) *Minorías y Fronteras en el Mediterráneo Ampliado. Un Desafío a la Seguridad Internacional del Siglo XXI* (pp. 119-136). Madrid.
- Carreño, E. (2015). *¡Soldados, a sus cuarteles! Hacia una gobernanza política en Nigeria*. UAM Ediciones.
- Carreño, E. (2014). ¿Quién manda a quién?: Los militares en la política de Nigeria. *Cuadernos de Estudios Africanos*, 28, 37-55. <https://doi.org/10.4000/cea.1664>
- Cuadrado, J. (2016). *Los retos de la seguridad en África. El potencial de la alerta temprana en la región de África Occidental*. Catarata.
- Duffield, M. (2001). *Las nuevas guerras en el mundo global. La convergencia entre desarrollo y seguridad*. Catarata.
- Fagioli, M. (2024). Complexities of State-Building in Somaliland. *International Studies Quarterly*, 68(2). <https://doi.org/10.1093/isq/sqae053>.
- Fanon, F. (1967). *The wretched of the earth*. Penguin.
- Floyd, R. (2025). Political Risk and Security Studies. Towards a Conceptual Framework of Political Riskiness. En Sottillotta, C.; Campisi, J.; Leitner, J. y Meissner, H. (eds.). *The Routledge Handbook of Political Risk*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003456117>
- Gould-Davies, N. (2025). "Globalisation in the first person". Political Risk and the Study of International Relations. En Sottillotta, C.; Campisi, J.; Leitner, J. y Meissner, H. (eds.). *The Routledge Handbook of Political Risk*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003456117>
- Gukurume, S. y Maringira, G. (2022). Confronting Legacies of Apartheid. The #RhodesMustFall and #FeesMustFall Movements in South Africa. En Bangura, I. (ed.) *Youth-Led Social Movements and Peacebuilding in Africa* (pp. 181-199) Routledge.
- Hosoi, T. (2025). Patterns of African Union Sanctions on Coups d'État: Civilian Control as a Political Message. *Journal of Asian and African Studies*. <https://doi.org/10.1177/00219096251369523>
- Institute for Economics & Peace [IEP]. (2025). *Global Peace Index 2025: Identifying and Measuring the Factors that Drive Peace*. <http://visionofhumanity.org/resources>.
- Iñiguez de Heredia, M. (2017). *Everyday resistance, peacebuilding and state-making. Insights from 'Africa's World War*. Manchester University Press.
- Komenan, D. (2020). África en conflicto: panorama general de la conflictividad en el continente africano. En Dagauh, G.G.K. (ed.). *Guerra y paz en África. Visiones retrospectivas de un continente buscando la paz* (pp. 25-50). Catarata.
- Konaré, D. (2020) La negociación de los roles de género en los conflictos de Malí: ¿cuál es el futuro para la participación de las mujeres en la política?. En Dagauh, G.G.K. (ed.). *Guerra y*

- paz en África. *Visiones retrospectivas de un continente buscando la paz* (pp. 74-88). Catarata.
- Lambrechts, D. (2025). Sink, Swim, or be the Captain. Emerging Political Risks and their Impact on Southern Africa. En Sottilotta, C.; Campisi, J.; Leitner, J. y Meissner, H. (eds.). *The Routledge Handbook of Political Risk*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003456117>
- Langa, A. (2017). *Sudán y Sudán del Sur*. Catarata.
- Lebakeng, T. J. (2023). Repositioning African states to prudently engage the global (dis)order and advance peace, security and development. *Global Change, Peace and Security*, 35(1), 59–70. <https://doi.org/10.1080/14781158.2024.2412638>
- Mamdani, M. (1996). *Citizen and subject: Contemporary Africa and the legacy of late colonialism*. David Philips.
- Mateos, O. (2009). Introducción. En Mateos, O. (ed.) *Paz y seguridad en África Subsahariana* (pp. 15-27). Catarata.
- Mateos, O. y Grasa, R. (2014). Introducción. En Mateos, O y Grasa, R. (eds.). *¿Una nueva era para África? Nuevos desafíos y perspectivas sobre paz y seguridad en África* (pp. 11-21). Catarata.
- Meijer, K. et.al. (2024). Participatory analysis of water-related conflict risks in complex adaptive systems – the case of the Inner Niger Delta in Mali. *Water International*, 49(1), 104–127. <https://doi.org/10.1080/02508060.2024.2315511>
- Neila, J.L. (2009). La «descolonización de las mentes» en el África Subsahariana: identidad y conocimiento social. *Estudios Internacionales*, 41(162), 31–62. <https://doi.org/10.5354/0719-3769.2009.13736>
- Ntububa, S. (2020). La problemática de la prevención de la violencia sexual en el este de la República Democrática del Congo y Kivu del Norte, desde la perspectiva feminista. En Dagauh, G. G. K. (ed.). *Guerra y paz en África. Visiones retrospectivas de un continente buscando la paz* (pp. 89-104). Catarata.
- Obi, C., y Andrews, N. (2025). The Dynamics of the Securitization of African Borderlands, Inter-State Relations, and the Role of non-State Actors in Security Governance. *African Security*, 18(3), 195–200. <https://doi.org/10.1080/19392206.2025.2550048>
- Peñas, F. (2000). Diplomacia humanitaria, protectorados y política de cañoneras. En Peñas, F. (ed.) *África en el Sistema Internacional* (pp. 51-83). Catarata.
- Peñas, F. (1994). África: la crisis del Estado postcolonial. *Cuenta y Razón*, 88, 61-68
- Pong, K. (2020). Ataques xenófobos en Sudáfrica: breve descripción de cómo la xenofobia puede amenazar la paz en el continente africano. En Dagauh, G. G. K. (ed.). *Guerra y paz en África. Visiones retrospectivas de un continente buscando la paz* (pp. 105-116). Catarata.
- Prunier, G. (2009). *Africa's World War: Congo, The Rwandan Genocide, and*

the Making of a Continental Catastrophe. Oxford University Press.

Ruíz-Giménez, I. (2003). *Las “buenas intenciones”*. *Intervención humanitaria en África*. Icaria.

Tarif, K. (2023). *Climate Change and Security in West Africa: Regional Perspectives on Addressing Climate-related Security Risks*. Stockholm International Peace Research Institute. <https://www.sipri.org/publications/2023/partner-publications/climate-change-and-security-west-africa-regional-perspectives-addressing-climate-related-security>

Telci, I.N., y Sefkatli, F.E. (2024). Between Containment and Degrading: Tracing U.S. Policy toward Africa through Strategic Transformations in AFRICOM’s Counter-Terrorism Approach. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2024.2386705>

United Nations Development Programme [UNDP]. 2025. *Human Development Report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*. New York.

ANEXO A

Variables componentes del índice de riesgo político actual

Indicador	Fuente	Descripción
Estado de Derecho	Proyecto V-Dem	En qué medida las leyes se aplican de manera transparente, independiente, predecible, imparcial y equitativa, y en qué medida las acciones de los funcionarios gubernamentales cumplen con la ley.
Libertades civiles	Proyecto V-Dem	La libertad civil se entiende como libertad liberal, donde la libertad es propiedad de los individuos. La libertad civil está constituida por la ausencia de violencia física cometida por agentes gubernamentales y la ausencia de restricciones a las libertades privadas y políticas por parte del gobierno.

Limitaciones legis- lativas al Poder Ejecutivo	Proyecto V-Dem	En qué medida el poder legislativo y las agencias gubernamentales, por ejemplo la contraloría general, el fiscal general o el defensor del pueblo, son capaces de cuestionar, investigar y ejercer supervisión sobre el ejecutivo.
Estabilidad política	Banco Mundial	Mide las percepciones sobre la probabilidad de inestabilidad política y/o violencia por motivos políticos, incluido el terrorismo.
Movilización de masas	Proyecto V-Dem	Con qué frecuencia y magnitud han sido los eventos de movilización masiva. Se refiere a la movilización de los ciudadanos para eventos masivos como manifestaciones, huelgas y sentadas.
Efectividad de gobierno	Banco Mundial	Capta las percepciones de la calidad de los servicios públicos, la calidad de la función pública y el grado de su independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con dichas políticas.
Calidad regulatoria	Banco Mundial	Captura las percepciones de la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.
Corrupción política	Proyecto V-Dem	Resume varias medidas, que aprovechan varios tipos de corrupción: tanto “pequeña” como “grande”; tanto soborno como robo; tanto la corrupción dirigida a influir en la elaboración de leyes como la que afecta su implementación.
Resiliencia al crimen organizado	Global Initiative Against Global Organized Crime	Capacidad para resistir y contrarrestar las actividades del crimen organizado.

Militarización	Institute for Economics & Peace	Situación de paz de cada país, considerando preparación y compromiso con niveles de conflicto interno y externo, entre otros criterios.
Cooperación internacional	Bertelsmann Stiftung	Evalúa si el liderazgo político está dispuesto y es capaz de cooperar con organizaciones y fuentes de ayuda externa: si el liderazgo político utiliza el apoyo de socios internacionales para implementar una estrategia de desarrollo a largo plazo, si el gobierno actúa como un socio creíble y confiable en sus relaciones con la comunidad internacional y si los dirigentes políticos están dispuestos y son capaces de cooperar con los países vecinos.
Ayuda internacional para el comercio	OCDE	Total recibido en el país de asistencia oficial para el desarrollo asignada a la ayuda para el comercio.
Globalización económica	KOF Swiss Economic Institute	Mide la inserción internacional del país, en las dimensiones comercial y financiera.
Transformación económica	Bertelsmann Stiftung	Estado de la economía de mercado, considerando desarrollo socioeconómico, organización del mercado y competencia, estabilidad monetaria y fiscal, propiedad privada, régimen de bienestar, desempeño económico y sostenibilidad.
Acceso a servicios financieros	Fondo Monetario Internacional	Evalúa el objetivo de fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a la banca, los seguros y los servicios financieros para todos, mediante la cuantificación del acceso a servicios bancarios.
Facilidad de hacer negocios	Banco Mundial	Nivel de desempeño regulatorio de cada economía
Libertad de inversión	Heritage Foundation	Evalúa una variedad de restricciones regulatorias que normalmente se imponen a la inversión.

